

La consulta plantea, si resulta conforme con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, atender las peticiones de un sindicato, cediéndoles copias de expedientes relativos a programas de actuaciones urbanísticas.

Con carácter general, y en la medida en que la entrega de una copia del Convenio urbanístico que se solicita contenga información concerniente a personas físicas identificadas o identificables (artículo 3.a) de la Ley 15/1999), debe indicarse que la comunicación de datos a la que se refiere la consulta constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la Ley, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

Por su parte, el artículo 11.1 de la misma Ley establece que “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”, quedando exceptuado el consentimiento en aquellos casos en que así lo prevea una Ley.

En este sentido, el artículo 31 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, delimita jurídicamente el concepto de interesado en el procedimiento administrativo, indicando a tal efecto que se considerarán como tales en el procedimiento “a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos; b) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte; y c) Aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva”.

A su vez, el artículo 35.a) de la misma Ley recoge el derecho de los ciudadanos a “A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”.

Siguiendo con el contenido de la Ley, el apartado tercero y cuarto del artículo 37 relativo al derecho de acceso a archivos y registros, señala lo siguiente:

“3. El acceso a los documentos de carácter nominativo que sin incluir otros datos pertenecientes a la intimidad de las personas figuren en los procedimientos de aplicación del Derecho, salvo los de carácter sancionador o disciplinario, y que, en consideración a su contenido, puedan hacerse valer para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos, podrá ser ejercido, además de por sus titulares, por terceros que acrediten un interés legítimo y directo.

4. El ejercicio de los derechos que establecen los apartados anteriores podrá ser denegado cuando prevalezcan razones de interés público, por intereses de terceros más dignos de protección o cuando así lo disponga una ley, debiendo, en estos casos, el órgano competente dictar resolución motivada.”

Es decir, por aplicación de los principios establecidos en la Ley 30/1992, el acceso a los documentos de carácter nominativo podrá ser ejercido por un tercero siempre y cuando acredite un “interés legítimo y directo” que justifique la cesión, y teniendo en cuenta que existe una norma con rango de Ley (la propia Ley 30/1992) la que habilita la cesión, podemos considerar que el solicitante tiene interés legítimo y directo.

Asimismo resulta preciso atender al contenido de la regulación Urbanística de Castilla-la Mancha, esto es, el Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla-la Mancha, en cuyo artículo 8 se regula la participación de los sujetos privados en la actividad administrativa urbanística señalando que:

“1. En la gestión y el desarrollo de la actividad de ordenación territorial y urbanística, la Administración actuante deberá fomentar y, en todo caso, asegurar la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses, así como velar por sus derechos de información e iniciativa.

2. Corresponden a todos, además de los reconocidos por la legislación general básica de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, los siguientes derechos:

a) Solicitar y obtener de la Administración competente información sobre el planeamiento urbanístico vigente, así como respecto de los requisitos para la formulación de instrumentos urbanísticos.

b) Comparecer y proponer soluciones y efectuar alegaciones en cualesquiera procedimientos de aprobación de instrumentos de planeamiento o de ejecución de éstos.

c) Formular y presentar a la Administración competente propuestas de instrumentos de planeamiento, salvo los de planeamiento municipal general.

d) Promover la urbanización, interesando la adjudicación de la ejecución de la misma en los términos de esta Ley, salvo que la Administración actuante opte por la gestión directa.

e) Exigir el cumplimiento de la legislación urbanística, incluso mediante el ejercicio de la acción pública.”

El mencionado artículo habilita a que se comuniquen información sobre los planeamientos urbanísticos, además de permitir el ejercicio de la acción pública para asegurar el cumplimiento de la legislación urbanística.

Por otro lado el artículo 42 del mismo texto legal regula los efectos de la aprobación de los Planes señalando que “1. La aprobación de los Planes o, en su caso, la resolución que ponga fin al pertinente procedimiento producirá, de conformidad con su contenido:

f) La publicidad de su entero contenido, teniendo derecho cualquier persona a consultar su documentación.

2. Se publicará en el «Diario Oficial de la Comunidad Autónoma» o en el «Boletín Oficial de la Provincia», según corresponda, el contenido íntegro de:

- a) Los acuerdos de aprobación, para su eficacia y la producción por los correspondientes Planes de los efectos previstos en el número anterior.
- b) El contenido documental de los Planes de carácter normativo que se determine reglamentariamente, para la entrada en vigor de dichos instrumentos.”

En consecuencia, ambos artículos habilitan a que se hagan públicos los planes de actuación urbanística.

Por otro lado, el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 junio por el que se aprueba la Ley del Suelo hace referencia también a la publicidad y eficacia de la gestión urbanística en su artículo 11 donde se prevé que “1. Todos los instrumentos de ordenación territorial y de ordenación y ejecución urbanísticas, incluidos los de distribución de beneficios y cargas, así como los convenios que con dicho objeto vayan a ser suscritos por la Administración competente, deben ser sometidos al trámite de información pública en los términos y por el plazo que establezca la legislación en la materia, que nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo común, y deben publicarse en la forma y con el contenido que determinen las leyes.

2. Los acuerdos de aprobación definitiva de todos los instrumentos de ordenación territorial y urbanística se publicarán en el «Boletín Oficial» correspondiente. Respecto a las normas y ordenanzas contenidas en tales instrumentos, se estará a lo dispuesto en la legislación aplicable.

3. En los procedimientos de aprobación o de alteración de instrumentos de ordenación urbanística, la documentación expuesta al público deberá incluir un resumen ejecutivo expresivo de los siguientes extremos:

- a) Delimitación de los ámbitos en los que la ordenación proyectada altera la vigente, con un plano de su situación, y alcance de dicha alteración.

b) En su caso, los ámbitos en los que se suspendan la ordenación o los procedimientos de ejecución o de intervención urbanística y la duración de dicha suspensión.

4. Las Administraciones Públicas competentes impulsarán la publicidad telemática del contenido de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística en vigor, así como del anuncio de su sometimiento a información pública.(..).

También viene a regularse la acción pública en el artículo 48 de la citada Ley señalando que “1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.”

Por todo lo expuesto podemos concluir que se podrá comunicar los Programas de actuación Urbanizadora, dado que tanto la Ley reguladora del suelo de Castilla-la Mancha como el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio prevén el carácter público de los instrumentos de ordenación urbanística.

A mayor abundamiento, en este mismo sentido se ha pronunciado la Agencia Española de Protección de Datos en una Resolución de archivo de fecha 13 de abril de 2007:

*“(..)En el presente caso, la cuestión a analizar es si el Alcalde de XXX debió denegar la solicitud, o facilitar a un tercero la ya citada documentación en base a lo recogido en el artículo 11 de la LOPD.*

*El Alcalde de XXX justifica que la entrega de la documentación se realizó a tenor de lo previsto en la siguiente legislación urbanística.*

*El artículo 304, 1 y 2 del Real Decreto Legislativo 1/1992, que dispone:*

*“1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación urbanística y de los Planes, programas, proyectos, normas y ordenanzas.”*

*“2. Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística”*

*La disposición adicional cuarta de la Ley 9/2002 de Ordenación y Protección del Medio Rural de Galicia, establece lo siguiente:*



*“1. Cualquier ciudadano, en ejercicio de la acción pública en materia de urbanismo, puede exigir ante los órganos administrativos y ante la Jurisdicción contencioso-administrativa el cumplimiento de la legislación y del planeamiento urbanístico*

*“2. La acción pública a que se hace referencia en el número anterior, si es motivada por la ejecución de obras que se estimen ilegales, puede ejercerse mientras se prolongue su ejecución y, posteriormente, hasta el vencimiento de los plazos de prescripción determinados en la presente Ley “.*

*Por su parte, el artículo 218 de la citada Ley 9/2002 establece como plazos de prescripción los siguientes:*

*“Las infracciones urbanísticas muy graves prescribirán a los quince años, las graves a los seis años y las leves a los dos años, a contar desde la finalización de las obras o de la actividad”.*

*En relación a la citada “ acción pública”, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dc 27/01/2004. recurso 1110/1999, es del tenor siguiente: “Si la totalidad ¿le los ciudadanos pueden verificar el cumplimiento de la legalidad urbanística, deben tener acceso a la totalidad de los acuerdos dictados en esta materia entre los que se encuentran los expedientes de licencia de obras para acondicionamiento de locales. En definitiva el ejercicio de la acción pública precisa el conocimiento de las actuaciones y ésta no puede ser negada porque el solicitante no promoviera ni se personara en el mismo antes de que hubiera recaído resolución, toda vez que el plazo para el ejercicio de dicha acción no concluye con la terminación del expediente, ni con la conclusión de las obras sino cuando han transcurrido los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.” Y continúa afirmando que “Como señala la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 30 04/1999 el artículo 105, h de la Constitución dispone que la Ley regulará, entre otras materias, «el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afrete a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas». Este precepto constitucional remite expresamente a la configuración legal el ejercicio del derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, como derecho no fundamental, aun que relacionado con el derecho de participación política, con el de libertad de información y con el de tutela judicial efectiva. Refleja una concepción de la información que obra en manos del poder público acorde con los principios inherentes al Estado democrático (en cuanto el acceso a los archivos y registros públicos implica una potestad de participación del ciudadano y facilita el ejercicio de la crítica del poder) y al Estado de derecho (en cuanto dicho acceso constituye un procedimiento indirecto de fiscalizar la sumisión de la Administración a la Ley y de permitir con más eficacia el control de su actuación por lajurisdicción Contencioso-Administrativa .*



*Por su parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 1/09/2005, recurso 1500/2001, en su Fundamento Jurídico Segundo, después de recoger el artículo 304 del Texto Refundido de la citada Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana, es del tenor siguiente: “el legislador ha incluido la acción pública en casos determinados, como el urbanismo, posibilitando con ello, un control objetivo de la legalidad de la actuación administrativa desde la perspectiva urbanística, a diléncia dela regla general estatuida que no es otra que la tenencia de un interés legítimo.*

*De lo expuesto, cabe concluir que el Ayuntamiento de XXX estaba habilitado por ley, en base a la citada “acción pública”, para facilitar la citada documentación, sin obtener el consentimiento del titular, de acuerdo con lo establecido en el citado artículo 11 .2.a) de la LOPD.*